

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 4, capítulo XXIX

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
María del Carmen Berdejo Bravo

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 4, capítulo XXIX

**Anotado y revisado por
María del Carmen Berdejo Bravo
(UAM Azcapotzalco)**

Capítulo XXIX

El gobierno constitucional vuelve a la capital

1861

CAPÍTULO XXIX

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL VUELVE A LA CAPITAL

1861

Juárez, inmediatamente de conocer el triunfo de Calpulalpan, envía a dos de sus ministros, Melchor Ocampo e Ignacio de la Llave, con instrucciones para preparar el regreso del gobierno nacional, los que llegan el 30 de diciembre a la Ciudad de México.

No existe intención de llevar a cabo represalias ni venganzas, pero es indispensable restablecer el orden y la disciplina. El 2 de enero, Ocampo expide una circular destituyendo a todos los empleados del gobierno conservador. El periódico *Siglo XIX*, sin embargo, al abogar por ellos dice, "apenas ha habido quien oiga los clamores del hambre de esas pobres gentes, que nada valen, pero que han contribuido a nuestros males tan pasivamente, como los tinteros y las plumas de las oficinas".

También ordena Ocampo intervenir los diezmatorios y curatos, para que el clero pague "con sus bienes los perjuicios ocasionados al país con la última guerra".

Ese mismo día ambos ministros designan gobernador del distrito al licenciado Justino Fernández y, en los sucesivos días, se publican las Leyes de Reforma, expedidas en 1859 en Veracruz, recomendando su cumplimiento y el gobierno del distrito inicia la reglamentación de algunas de ellas.

El día 10 llega Juárez a la Villa de Guadalupe, donde se detuvo, a solicitud de González Ortega, Ocampo y de la Llave, así como del ayuntamiento, quienes le pidieron entrara a la Ciudad de México hasta el día siguiente, para dar mayor solemnidad al acto.

Efectivamente, el día 11 fue recibido en, medio de gran regocijo, pero de inmediato dieron principio una serie de variados problemas que preferimos dejar que relate algunos de ellos el mismo prócer, no obstante que ya se han reproducido en las *Efemérides*.

El mismo día 11, "el señor de la Llave me manifestó que en la ciudad se trataba, en varios círculos liberales, de pedir la remoción del ministerio, según le había dicho don Ezequiel Montes al señor de la Fuente. El señor Ocampo me propuso que lo más conveniente sería que los actuales ministros presentaran su dimisión para que yo quedara en libertad de formar un nuevo gabinete, pues de ninguna manera quería que el personal del ministerio fuese un obstáculo para la marcha del gobierno en las presentes circunstancias. Los señores de la Llave, de la Fuente y Emparan fueron de la misma opinión. No accedí a esta pretensión de los señores ministros porque consideré injusta la exigencia de los que pedían el cambio de gabinete, pues los señores ministros que en días aciagos habían trabajado con lealtad y constancia para sostener con honor al gobierno, no habían dado motivo alguno, el más leve, que los hiciere indignos de la confianza pública y del jefe del Estado. En consecuencia, supliqué a dichos señores ministros desistieran de un pensamiento que tanto los honraba.

A las dos de la tarde salí de la Villa de Guadalupe y llegué a las tres a Palacio.

En la noche cité a junta a los señores ministros para arreglar varios puntos que debían servir de norma al gobierno en su marcha. El señor de la Fuente leyó el borrador del *Manifiesto* que yo debía dar a la nación participándole la vuelta del gobierno a la capital; después de algunas ligeras modificaciones se mandó a la imprenta.

Se trató de la responsabilidad de los cabecillas reaccionarios y la manera de proceder contra ellos. El señor Ocampo, lo mismo que el señor de la Llave opinaron que debían ser expulsados de la República los obispos, así como los señores Pacheco, Neri del Barrio y Pastor y que los demás cabecillas fueran juzgados

conforme a la ley de conspiradores. El señor de la Fuente opinó que los obispos y cabecillas debían sujetarse a juicio y castigarse conforme a las leyes. Durante la discusión se recibió un pliego de Veracruz, venido por extraordinario, en que se daba cuenta de la aprehensión de don Isidro Díaz (Lombardo).¹ Dispuse que se contestara previniendo que Díaz fuera juzgado conforme a la ley de conspiradores y que la orden se transcribiera a los señores gobernadores y generales en jefe. El señor de la Llave, ministro de la Guerra, libró dicha orden; pero agregó, que el reo y los que estuvieran en su caso fueran juzgados conforme a la ley de conspiradores y pasados por las armas.

Quedó pendiente la discusión y sólo quedó acordado que se diera la orden respectiva a los ministros referidos y a monseñor Clementi, publicándose las órdenes en los periódicos. Los señores ministros insistieron en presentar sus renunciaciones y después de varias reflexiones que se hicieron, se acordó que se hiciera constar su nueva pretensión, lo que bastaba para que quedasen libres de toda crítica fundada. Propuse que se integrase el gabinete nombrándose al señor general don Jesús González Ortega para el ministerio de la Guerra y al señor don Francisco Zarco para el ministerio de Relaciones. Así quedó acordado, previniéndose que el señor Ocampo pusiera las comunicaciones respectivas".²

Además formaban parte del gabinete, en Hacienda, Ocampo; en Fomento, José de Emparan; en Justicia e Instrucción Pública, Juan Antonio de la Fuente y en Gobernación, Ignacio de la Llave.

Al día siguiente nuevamente se reunió el gabinete y "se acordó que el señor de la Fuente formara el proyecto de amnistía; pero volviéndose a tratar la cuestión del destierro de los obispos, el señor de la Fuente insistió en que no fueran desterrados sino sujetos a juicio. Se manifestó lo

¹ Concuño de Miramón y ministro durante su gobierno.

² Véase tomo 1.

difícil que era obtener una sentencia pronta por las dilaciones de un juicio y por la falta de energía de los jueces. Sin embargo, el señor de la Fuente no se convenció y quedó pendiente este negocio.

Día 14.- Vino la esposa de Miramón a suplicar que no se fusilase inmediatamente a (Isidro) Díaz, sino que se le sujetase a juicio. La trajo don Benito Gómez Farias, quien expuso que Díaz había tomado empeño para que ni a él ni al señor Degollado se les fusilara cuando cayeron prisioneros en Toluca.

Di cuenta de esto en junta de ministros, compuesta de los señores Ocampo, González Ortega, de la Llave, Emparan y de la Fuente y se acordó, por unanimidad, que se diese orden para que Díaz fuera desterrado por cinco años fuera de la República. Comunicó la orden el señor de la Fuente por extraordinario.

Al día siguiente los clubes y la prensa se declararon contra esta medida y, en consecuencia, se acordó que se revocara la orden y se previniera la prisión de Díaz y su remisión a esta capital para ser juzgado conforme a la ley. Se comunicó por extraordinario esta providencia.

Se comenzó a discutir la ley de amnistía; pero, al tratarse del destierro de los obispos, el señor de la Fuente manifestó su inconformidad y presentó su renuncia que le admitió.

La prensa y los clubes siguieron atacando al gobierno, pidiendo la remoción del gabinete".³

Al dejar Ocampo el cargo de ministro de Hacienda envía una carta seguramente a todos los gobernadores, cuyo ejemplar dirigido a Plácido Vega, gobernador de Sinaloa, se reproduce en las siguientes páginas.

Su texto es por demás interesante, explica con reflexiones de gran altura política, la conveniencia de la dimisión colectiva del gabinete. Con hombría política declara que está presto en asumir las responsabilidades en que haya incurrido el gabinete de que forma parte; invita a tener confianza en Juárez y, en general, en los hombres del partido liberal y confía en que Vega seguirá actuando "unísono en el programa liberal,

³ Véase tomo 1.

cuyo espléndido triunfo hemos conquistado". Su retiro es un incidente, pues él continuará en la lucha.

Releyendo tan emotivo texto, quizás el último documento que firmaría como funcionario, nos ha parecido un testamento político.

El 17 de enero se notificó al arzobispo de México, Lázaro de la Garza Ballesteros y los obispos Clemente de Jesús Munguía, Joaquín Madrid, Pedro Espinosa y Pedro Barajas, que tenían tres días para salir del país.

Grave fue la controversia entre los que, desde fuera del gobierno, exigían mano dura contra los reaccionarios vencidos y quienes con la responsabilidad del poder en las manos tenían que ser justos, enérgicos y a la vez considerar la conveniencia de lograr la paz nacional, el olvido de rencores la búsqueda de fórmulas de convivencia.

Es certero el enjuiciamiento de Justo Sierra, cuando al examinar este problema, dice:

El criterio político de Zarco y el del presidente coincidían: castigo a todos los rebeldes, sólo castigos de sangre a los que prolongaban la guerra civil con las armas en la mano; no excluir a nadie. No era ésta, sin embargo, la política de la venganza, era la del escarmiento; no tenía por objeto darse una satisfacción, sino dar a todos una lección. Ya vimos cómo se procedió contra los ministros extranjeros que se habían empleado en considerar como gobierno de derecho a la reacción, que era sólo un gobierno de hecho; el programa de Zarco fue, lo vimos ya, desinteresar a las naciones de la suerte de sus enviados diplomáticos; en realidad lo consiguió, se consiguió con España sobre todo, que no hizo un capítulo especial de su venida a México, de la necesidad de vengar el agravio que se le había inferido en la persona de Pacheco, porque no creyó nunca en tal agravio.

Respecto de los obispos, la resolución presidencial fue por extremo sensata; víctimas de una política nefasta para la Iglesia mexicana, preconizada por su prelado que creía deber imitar la intratable rigidez de propósitos -no de carácter- de Pío IX, habían

tomado parte activa en la guerra civil, habían dado al gobierno reactor cuantos recursos habían podido, se habían rebelado abierta y razonadamente contra el gobierno legítimo y habían dado a los constitucionalistas motivo plausible para transformarse en reformistas y la Reforma, con sólo ser, había creado las armas con que había de triunfar, porque había puesto a todos los intereses, a todas las codicias, a todas las avideces de su parte. Necesitaban los obispos, altos funcionarios morales de la reacción, responder de su error y purgar su culpa. La excitación era inmensa; se trataba de someterlos a largos y feroces procesos, para azotarlos de injurias y coronarlos de escarnios; esto iba a ser un modo de tener caldeadas, a la temperatura de furor, las masas que obedecían a los clubes, lo cual era un peligro incesante para el orden y una manera de convertir en mártires a aquellos varones -malos ciudadanos, pero hombres excelentes- y de conmover profundamente a la parte más numerosa y más sensible de la sociedad. Por eso Juárez, con Ocampo, decidió expulsarlos. Los obispos, venerables apóstoles caducos, no supieron ver esto, que los salvaba a ellos y salvaba la paz nacional.⁴

La presión fue tal que el 17 renunció todo el gabinete, siendo sustituido por otro en que Zarco es el secretario de Relaciones Exteriores; González Ortega es nombrado ministro de Guerra y Marina; Ignacio Ramírez desempeña Justicia e Instrucción Pública; Guillermo Prieto ocupa el ministerio de Hacienda y se designa, además, en espera de su respuesta, a Pedro Ogazón, para Gobernación y Miguel Auza, en Fomento.

El gobierno envía a los gobernadores y hace pública una circular, bajo la firma de Zarco, en que expone, en prosa limpia y elegante, un amplio programa de gobierno; se trata de un documento valioso para entender la posición del gobierno liberal. Independencia, decoro y autodeterminación frente a los gobiernos extranjeros, consolidación y

⁴ Justo Sierra. *Juárez, su obra y su tiempo*, México, UNAM, 1956, pp. 258 y 259.

vigencia plena de las Leyes de Reforma, orden y técnica en la Hacienda Pública, reforma fiscal buscando la supresión de las alcabalas a la larga y pronta restauración del orden constitucional y, como ortodoxos liberales, "dejar hacer" en lo económico. Además castiga a quienes, a pretexto de diferencias ideológicas, atentaron contra el patrimonio nacional o particular o cometieron crímenes; si bien exige respeto a la libertad de pensar, prohibiendo las prisiones arbitrarias y sujetando a sus jueces a los reos políticos.

DOCUMENTOS

1861

JUÁREZ EMPRENDE
SU MARCHA A MÉXICO

Heroica Veracruz, enero 2 de 1861

Excelentísimo señor don Santiago Vidaurri

Muy señor mío:

Los últimos acontecimientos de que ya estará usted impuesto por los papeles públicos, han dado por resultado la ocupación de la capital de la República por nuestro ejército victorioso. He creído indispensable que el gobierno general se fuera a establecer definitivamente a dicha capital, por lo que mañana mismo emprendo mi marcha a ella.

Tengo el gusto de ofrecerme de nuevo a sus órdenes, suplicándole mande a su afectísimo amigo y s. s. q. b. s. m.

Benito Juárez

DESTITUCIÓN DE EMPLEADOS
QUE SIRVIERON AL GOBIERNO CONSERVADOR

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público

Circular

El excelentísimo señor presidente interino constitucional de la República se ha servido disponer que todos los empleados de la lista civil, que hayan servido a lo que aquí se llamó gobierno durante el período en que fue interrumpido el orden legal, sean separados inmediatamente de las oficinas, dando cuenta los jefes de ellas a esta secretaría de los que por esta disposición queden destituidos de sus empleos.

Dios y Libertad. México, enero 2 de 1861.

(Melchor) Ocampo

INTERVENCIÓN DE LOS DIEZMATORIOS Y CURATOS

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público

Circular

Habiendo sido el clero el principal promovedor, sostenedor e instigador de la rebelión de Tacubaya y de la desastrosa guerra que de ella se ha seguido; habiendo tal guerra ocasionado a naturales y extraños multitud de gravísimos perjuicios, siendo responsables, conforme a nuestras leyes, con su persona y bienes los autores de las revueltas, el clero pagará con sus bienes los perjuicios ocasionados al país por la última guerra.

En consecuencia, cuidará usted de intervenir los diezmatorios de ese estado y de hacer que se separe de la masa decimal un tercio, que abonará usted anualmente a la cuenta del clero de esa diócesis, hasta que hecha la liquidación de daños y perjuicios ocasionados por esta última guerra, se reparta entre todas las diócesis y en la proporción debida, la satisfacción de este pago.

Intervendrá usted, igualmente, los emolumentos que los párrocos saquen de sus curatos y, deducidos los gastos de fábrica y sacristía, exigirá usted el veinte por ciento de los rendimientos, que irá igualmente abonando a la misma cuenta de daños y perjuicios.

El gobierno cuidará de avisar a ustedes, los párrocos, a quienes exceptúe de esta medida porque su conducta no haya sido atentatoria contra la soberanía de la nación y sus leyes, así como éstos cuidarán de exponer las razones que tuvieran para gozar de esta excepción.

De esta nueva recaudación separará usted un cinco por ciento, con el que gratificará a los interventores de este ramo.

El producto neto de esta recaudación lo tendrá usted a disposición de la junta creada por el decreto de diciembre del año próximo pasado, que establece el modo de satisfacer las reclamaciones que se hagan por ocupaciones de bienes y por daños de la guerra, pues que este nuevo fondo se dedica al de reclamaciones, en reemplazo del quince por ciento de redenciones de capitales que designa dicho decreto, cuyo quince por ciento dejará de aplicarse a tal objeto cuando la experiencia pruebe que el fondo que ahora designa es superior o igual, aplicándose uno y otro fondo a las reclamaciones, hasta que el gobierno disponga que cese el mencionado fondo de quince por ciento, por estar suficientemente remplazado.

Ya se darán a usted oportunamente las convenientes instrucciones reglamentarias, así para que se entienda con las claverías de las catedrales y notarías de los curatos, como para el arreglo económico de la cuenta y modo de llevarla; pero desde ahora se le recomienda la mayor exactitud y eficacia en este encargo.

Dios y Libertad. México, enero 3 de 1861.

(Melchor) Ocampo

SUSPENSIÓN DE PAGOS
POR MONTEPÍO CIVIL Y MILITAR

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y
Crédito Público

Circular

Dispone el excelentísimo señor presidente que esa oficina remita a esta secretaría, relaciones de los pagos que le estén consignados, por montepío civil y militar, así como pensiones también civiles y militares, etc., etc., cuidando de explicar en dichas relaciones las declaraciones que se hubieren hecho desde el 17 de diciembre de 1857 en adelante, por el llamado gobierno emanado del Plan de Tacubaya.

Asimismo dispone su excelencia [S. E.] que esta oficina suspenda todos los pagos de las clases que se citen en esta circular, hasta que el gobierno resuelva ordenarlos, con conocimiento de su procedencia y mérito.

Todo lo que comunico a usted para su más exacto cumplimiento.

Dios y Libertad. México, enero 4 de 1861.

(Melchor) Ocampo

GONZÁLEZ ORTEGA PROHIBE EL SISTEMA DE LEVA PARA EL SERVICIO DE LAS ARMAS

Señor general cuartel maestro:

En la *Estafette* de ayer y en otros periódicos que se publican en esta capital, se ha denunciado el hecho escandaloso de continuar en práctica el odioso sistema de tomar por leva para el servicio de las armas a los ciudadanos que transitan por las calles y, como la principal mira que se ha llevado durante la encarnizada lucha de tres años para defender la Constitución de 1857, es hacer efectivas las garantías que otorga en beneficio del hombre y de su dignidad, abatida siempre y despreciada cuando se le precisa a prestar servicios contrarios a su voluntad, me he creído con la obligación de prevenir a V. E. que proceda a levantar la averiguación respectiva hasta cerciorarse si es o no cierto el hecho que se refiere, procediendo, en el primer caso, al castigo del jefe o jefes que hayan tenido participio en el abuso que se denuncia.

Si, cuando para conseguir los fines de la revolución que ha triunfado, se hizo tolerable alguna vez obligar al ciudadano a tomar las armas para resistir las fuerzas organizadas que tenía la reacción, supuesto que una dilatada experiencia demostró que de otra manera no podía con buen éxito contrarrestarse el terror que infundía la tiranía de nuestros contrarios, tan luego como han cesado esas circunstancias y el ejército federal ha ocupado esta capital, venciendo a sus enemigos, han debido restablecerse en toda su plenitud los derechos otorgados al hombre y al ciudadano. Es, pues, un deber del mismo ejército mostrarse celoso por la estabilidad de tales derechos y yo, como su jefe, tengo el honor de ser su intérprete, previniendo en consecuencia a V. S. haga saber por la orden general que se comete, no una simple falta, sino un grave delito al tomar por leva para el servicio de las armas a cualquier individuo y que, por lo

mismo, queda prohibido tal procedimiento y será castigado con tal severidad el que lo cometiere; bajo la inteligencia que, correspondiendo al gobierno general proveer a los cuerpos que se consideren permanentes de las plazas que les falten, para que tengan el número que se les designe, el mismo Supremo Gobierno dispondrá el modo de cubrir, sus bajas dictando al efecto los reglamentos que tuviere por conveniente.

Dios, Libertad y Reforma. México, enero 5 de 1861.

Jesús González Ortega

PROCLAMA DE JUÁREZ
AL VOLVER A LA CIUDAD DE MÉXICO

¡ Mexicanos!

Al restablecer el gobierno legítimo en la antigua capital de la nación, os saludo por la restauración de la paz y por los óptimos frutos de las victorias que lograron vuestras huestes valerosas. En desahogo de mis sentimientos, debo mostrar a la faz del mundo, el orgullo que me cabe de tener por patria un pueblo tan grande en el primer siglo de los pueblos.

¡Mexicanos! Cuarenta años hace que el jefe de las *tres garantías* dijo a nuestros padres que les había enseñado el modo de ser libres. Mas vosotros, de nadie sino de vosotros mismos, aprendisteis a acometer y rematar la empresa gigantesca de la democracia en México. Vosotros domasteis una facción audaz y poderosa y arrojasteis a los vientos sus títulos. Gracias a vosotros, gracias a vuestras legiones inmortales, no existe ya en la tierra de Hidalgo y Morelos la oligarquía armada, ni la otra más temible del clero que parecía incontrastable por la influencia del tiempo, de los intereses y de los prestigios.

¡Honor y gloria a los guerreros del pueblo y a sus insignes jefes, por haber peleado hasta conseguir que la patria no sea más el objeto de cruel ansiedad para sus hijos, de compasión para sus amigos, de menosprecio y de asechanzas para los especuladores de sus desaciertos! En adelante no será posible mirar con desdén a la República Mexicana, porque tampoco será posible que haya muchos pueblos superiores a ella, ni en amor y decisión por la libertad, ni en el desenvolvimiento de sus hermosos principios, ni en la realización de la confraternidad con los hombres de todos los pueblos y de todos los cultos.

¡Mexicanos! En el estruendo de las batallas proclamasteis los principios de libertad y Reforma, y mejorasteis con ellas vuestro Código

fundamental. Fue la Reforma el paladión de la democracia y el pueblo ha derramado profusamente su sangre por hacerla triunfar de todos sus enemigos. Ni la libertad, ni el orden constitucional, ni el progreso, ni la paz, ni la independencia de la nación, hubieran sido posibles fuera de la Reforma y, es evidente, que ninguna institución mexicana ha recibido una sanción popular más solemne ni reunido más títulos para ser considerada como base de nuestro derecho público. Por eso mi gobierno la ha sostenido con vigor y ha desarrollado con franqueza sus principios saludables.

Durante la terrible lucha del pueblo contra la aristocracia, trasplantada de la colonia española a México independiente, nada ha tenido que hacer, sino apoyar el espontáneo y vigoroso impulso de la opinión. La buena senda era clara y segura, porque un pueblo denodado marchaba por ella. Mil veces más difícil hubiera sido realizar el criminoso empeño de una defección y, por otra parte, el mundo entero no hubiera podido ofrecerme un galardón que igualase a la conciencia de haberme identificado con las leyes y con la suerte de mi patria en los días tormentosos de que ha salido con tanta gloria.

¡Mexicanos! Inmensos sacrificios han santificado la libertad en esta nación. Sed tan grandes en la paz como lo fuisteis en la guerra que llevasteis a un término tan feliz y la República se salvará. Que se consolide, pasada la lucha, esa unión admirable con que los estados hicieron propicia la victoria. Que sea más profundo que nunca el respeto a la legalidad y a la Reforma, tan heroicamente defendidas, y la obediencia a los poderes generales, que son la garantía de la federación y de la nacionalidad mexicana. Si ofrecéis el ejemplo de un pueblo libre que sabe darse y cumplir sus propias leyes; si cooperáis con vuestra voluntad potentísima al buen éxito de las medidas emanadas de una administración que ha sostenido con lealtad vuestra causa en tiempos azarosos, ¡mexicanos! las enormes dificultades de la gobernación, aglomeradas por la guerra, serán vencidas irremisiblemente; una amnistía tan amplia como la sana política puede aconsejarla y que, por lo mismo, no alcanzará a aquellos crímenes cuya impunidad sería una falta gravísima y de todo punto injustificable, restituirá la calma a los ánimos

y restaurará el imperio de la moral arruinado por las sediciones; la justicia reinará en nuestra tierra; la paz labrará su prosperidad; la libertad será una realidad magnífica y la nación atraerá y fijará sobre sí la consideración de todos los gobiernos y las simpatías de todos los pueblos libres o dignos de serlo.

En cuanto a mí, dentro de muy breve tiempo entregaré al elegido del pueblo el poder, que sólo he mantenido como un depósito confiado a mi responsabilidad por la Constitución. Dos cosas colmarán mis deseos: la primera el espectáculo de vuestra felicidad y la segunda, merecer de vosotros, para legarlo a mis hijos, el título de buen ciudadano.

México, enero 10 de 1861.

Benito Juárez

JUÁREZ PIENSA QUE SE HA ALCANZADO
EL TRIUNFO DEFINITIVO

México, enero 12 de 1861

Señor gobernador del estado de Nuevo León y Coahuila,
don Santiago Vidaurri

Muy señor mío y amigo:

Ayer he entrado a esta capital, donde el gobierno constitucional ha sido recibido con grandes muestras de entusiasmo y alegría, teniendo la satisfacción de ver el buen sentido que reina en el pueblo y que me presagia la seguridad para el porvenir de cimentar la estabilidad de la Reforma que, en el poco tiempo que me queda para dirigir a la nación, procuraré desarrollarla hasta donde mis esfuerzos alcancen.

Me congratulo con usted por el triunfo definitivo de la gran causa que hemos defendido y me ofrezco, como siempre, en esta capital para lo que usted guste ocuparme y para que con sus luces y consejos me ayude en el difícil puesto en que estoy.

Consérvese usted bueno y mande a su afectísimo amigo y s. s. q. b.
s. m.

Benito Juárez

EXPULSIÓN DEL EMBAJADOR ESPAÑOL

Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores
Señor don (Joaquín) Francisco Pacheco

El excelentísimo señor presidente interino constitucional no puede considerar a usted sino como a uno de los enemigos de su gobierno, por los esfuerzos que usted ha hecho en favor de los rebeldes usurpadores que habían ocupado en los tres años últimos esta ciudad.

Dispone, por lo mismo, que salga usted de ella y de la República, sin más demora que la estrictamente necesaria para disponer o verificar su viaje.

Como a todas las naciones amigas, el excelentísimo señor presidente respeta y estima a la España; pero la permanencia de la persona de usted en la República no puede continuar. Es, pues, enteramente personal por usted la consideración que mueve al señor presidente a tomar esta resolución.

Dios, etc. México, enero 12 de 1861.

Melchor Ocampo

EXPULSIÓN
DEL MINISTRO DE GUATEMALA

Secretaría de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores

Señor don Felipe Neri del Barrio:

El excelentísimo señor presidente interino constitucional no puede considerar a usted sino como a uno de los enemigos de su gobierno, por los esfuerzos que usted ha hecho en favor de los rebeldes usurpadores que habían ocupado en los tres años últimos esta ciudad. Dispone, por lo mismo, que salga usted de ella y de la República, sin más demora que la estrictamente necesaria para disponer o verificar su viaje.

Como a todas las naciones amigas el excelentísimo señor presidente respeta y estima a Guatemala, pero la permanencia de la persona de usted en la República no puede continuar.

Es, pues, enteramente personal por usted la consideración que mueve al señor presidente a tomar esta resolución.

Dios, etc. México, enero 12 de 1861.

(Melchor) Ocampo

EXPULSIÓN
DEL MINISTRO DEL ECUADOR

Palacio Nacional, México, enero 12 de 1861

Señor don Francisco de P. Pastor:

El excelentísimo señor presidente interino constitucional, siente mucho no poder considerar a usted sino como a uno de los enemigos de su gobierno, por los esfuerzos que usted ha hecho en favor de los rebeldes que habían ocupado en los tres últimos años esta ciudad.

Dispone, por lo mismo, que salga usted de ella y de la República, sin más demora que la estrictamente necesaria para disponer y verificar su viaje.

Como a todas las naciones amigas, el excelentísimo señor presidente respeta y estima a la República del Ecuador, pero la permanencia de la persona de usted en la de México, no puede continuar.

Es, pues, enteramente personal por usted la consideración que mueve al excelentísimo señor presidente a tomar esta resolución.

Melchor Ocampo

Es copia que certifico.

México, enero 12 de 1861

Benito Gómez Farias

EXPULSIÓN
DEL DELEGADO APOSTÓLICO

Secretaría de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores

Señor don Luis Clementi, arzobispo de Damasco:

No es de ningún modo conveniente al Supremo Gobierno Constitucional de la República la permanencia de usted en ella, después que tantos sacrificios ha costado a esta nación el restablecimiento del orden legal, después que tanta sangre se ha derramado en este suelo y todo esto por el escandaloso participio que ha tomado el clero en la guerra civil. Hoy que el orden constitucional queda establecido, el excelentísimo señor presidente ha dispuesto que usted salga de la República en un breve término que sea absolutamente el necesario para preparar su viaje.

Dios y Libertad., enero 12 de 1861.

(Melchor) Ocampo

DIVISIÓN DE LOS CONVENTOS EN LOTES
PARA FACILITAR SU VENTA

Excelentísimo señor gobernador del Distrito Federal,
señor don Francisco Pacheco

Excelentísimo señor:

A la consulta que usted hace a este ministerio, sobre si no obstante estar derogados por el artículo 2º de la ley de 24 de octubre último, las prevenciones de la de 13 de julio de 1859, relativas a la división en lotes de los conventos no vendidos, se puede proceder a ésta, fundando su consulta en que sin esa división se entorpecería la venta de los conventos existentes en esta capital, por la dificultad de que así haya compradores y, además, daría por resultado dicho artículo 2º que produzcan aquellas menos precio; tengo el honor de contestarle que se formarán lotes por los valuadores y así se venderán los conventos en el caso de que no haya compradores por el todo, pues lo que se desea es facilitar la venta.

Protesto a V. E. las consideraciones de mi aprecio.

Dios, Libertad y Reforma. México, enero 12 de 1861.

Melchor Ocampo

EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
PARTICIPA OFICIALMENTE LA ENTRADA
DEL GOBIERNO A LA CAPITAL

Excelentísimo señor:

Ayer entró el gobierno legítimo de la República en esta capital, donde fue recibido con notables demostraciones de júbilo y de amor a la libertad.

El propio gobierno se ocupó desde luego de la reorganización de los ramos administrativos, lo mismo que de acordar las medidas extraordinarias que la experiencia y la opinión pública aconsejan como necesarias, para que se consolide la paz de la nación y se promete que sus actos dirigidos, no a ejercer venganza, sino a hacer efectiva la justicia, a que la sociedad mexicana elija libremente a sus legisladores y a sus gobernantes y a que marche por la senda de la Reforma que debe engrandecerla, encontrarán en ese Estado el apoyo conveniente.

Dígoles todo a V. E. por acuerdo del excelentísimo señor presidente interino y le reitero mi aprecio y consideración.

Dios y Libertad. México, enero 12 de 1861.

(José de) Emparan

EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
ORDENA QUE CESEN LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS
CONCEDIDAS A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS,
EN EL RAMO DE HACIENDA

Excelentísimo señor:

Para que la Hacienda Federal pueda organizarse después de los trastornos producidos por la guerra que felizmente ha terminado, es necesario que las oficinas recaudadoras y de distribución estén sujetas al ministerio de Hacienda, como lo previenen las leyes.

Es tanto más urgente este arreglo, cuanto que para atender a la subsistencia de las fuerzas que han restablecido la paz de la República, el ministerio citado se ve a menudo en graves dificultades por no estar el gobierno general en posesión de todas sus rentas.

El excelentísimo señor presidente, que conoce la buena fe de vuestra excelencia [V. E.], no duda que ese gobierno sabrá abstenerse de librar orden alguna con relación al erario federal. Como ha cesado la guerra por la cual se concedieron a los estados facultades extraordinarias respecto de la Hacienda y de otros ramos del gobierno general, S. E. el presidente ha dispuesto que cesen desde luego y cuenta con que V. E. se servirá informar de los compromisos que haya contraído en el uso de ellas. Es indispensable que el Supremo Gobierno tenga datos sobre el estado de la Hacienda Federal y que, en lo sucesivo, únicamente el ministerio de Hacienda, por conducto de la Tesorería General de la Nación, libre las órdenes de pago, con conocimiento de las necesidades que haya en cada estado.

Reitero a V. E. las seguridades de mi consideración y aprecio.

Dios y Libertad. México, enero 12 de 1861.

(José de) Emparan

EL EMBAJADOR PACHECO SE DA POR NOTIFICADO
QUE DEBE SALIR DE MÉXICO

Excelentísimo señor don (Melchor) Ocampo,
ministro *ad interim* de Relaciones

El infrascrito, embajador de su majestad católica [S. M. C.], ha recibido la comunicación que con fecha de ayer le dirige, sólo con su nombre y aun inexactamente escrito, el excelentísimo señor don (Melchor) Ocampo, ministro *ad interim* de Relaciones.

El infrascrito no se propone discutir esta singular comunicación. Debe sólo decir al señor Ocampo que, no habiendo venido a México como particular sino únicamente como embajador de la reina de España, según consta en los archivos de Palacio, las comunicaciones de oficio que particularmente se le dirigen son y no pueden menos de ser personalmente dirigidas al embajador de la reina de España.

Por lo demás, el infrascrito, con todo el personal de la embajada española, partirá de México y saldrá del territorio de la República, sin otra detención que la estrictamente necesaria para preparar un viaje de dos mil leguas.

El infrascrito debe decir también al excelentísimo señor ministro de Relaciones que, al abandonar este territorio, deja los archivos de su Legación y los súbditos de S. M. C. bajo las garantías del derecho de gentes y al cuidado y protección del excelentísimo señor ministro de su majestad [S. M.], el emperador de los franceses.

Por último, el infrascrito no puede menos de preguntar al propio señor ministro si se facilitará la escolta que hace necesaria para su

seguridad y la de las personas que le acompañan, el triste estado de los caminos.

México, 13 de enero de 1861.

Joaquín Francisco Pacheco

EL MINISTRO ECUATORIANO RECHAZA
EL CARGO DE SER ENEMIGO DEL GOBIERNO

México, enero 13 de 1861

Excelentísimo señor don Melchor Ocampo, etc.

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Guatemala, ha recibido la comunicación que con fecha de ayer le dirigió el excelentísimo señor don Melchor Ocampo, ministro *ad interim* de Relaciones Exteriores, según ha visto por los papeles públicos, pues no tiene ningún conocimiento oficial de su nombramiento.

Sin embargo, el infrascrito, atendiendo a la dignidad del gobierno que tiene el honor de representar y a la suya propia, se abstendrá de toda polémica sobre el contenido de aquella comunicación y procurará permanecer en esta capital sólo el tiempo estrictamente necesario para arreglar su salida fuera de la República, sintiendo que los muchos años que lleva de estar en ella, lo obliguen a detenerse más de lo que quisiera.

El infrascrito pondrá, oportunamente, en conocimiento del señor Ocampo, el día de su salida, por si su gobierno tuviere a bien facilitarle una escolta, que hace indispensable la inseguridad de los caminos.

Francisco de P. Pastor

OCAMPO OFRECE ESCOLTA
AL EMBAJADOR PACHECO

Señor don (Joaquín) Francisco Pacheco

En respuesta a la comunicación de usted, fecha de ayer, debo manifestarle que, aunque ya hay seguridad en los caminos por haberse mandado tropa bastante a custodiarlos, si usted se sirve avisar oportunamente de su salida, se le dispondrá cuanta escolta sea necesaria a fin de que pueda caminar con mayor seguridad.

Dios, Libertad y Reforma. México, enero 14 de 1861.

(Melchor) Ocampo

SE DISCUTE EN JUNTA DE MINISTROS
LA AMNISTÍA POR DELITOS POLÍTICOS

Artículo 1º- Se concede amnistía por los delitos políticos, sometidos a los tribunales federales, cometidos desde el 16 de diciembre de 1857 hasta la publicación de esta ley.

Artículo 2º- Se exceptúan de esta gracia:

I.- El presidente y ministros que destruyeron la Constitución de 1857, los que funcionaron como consejeros, o aceptaron empleos en aquella época y los gobernadores y generales en jefe, que sostuvieron o aceptaron aquel orden de cosas.

Los comprendidos en esta fracción serán juzgados conforme a las leyes vigentes en aquella época.

II.- Los que desde el 11 de enero de 1858 han fungido de presidentes de la República y los que arrogándose la soberanía nacional los eligieron.

III.- Los que fungieron de secretarios de despacho; los consejeros que aceptaron el encargo.

IV.- Los gobernadores o comandantes generales de los estados o departamentos y los generales de división o de brigada que sirvieron a la reacción.

V.- Los que hayan cometido delitos del orden común o de trascendencia internacional. Tanto los autores principales como sus cómplices sufrirán las penas corporales y pecuniarias a que fueren condenados conforme a las leyes.

Artículo 3º- No abraza esta amnistía, los perjuicios al derecho de tercero, ni la defraudación o despilfarro de los caudales públicos, ni la anticipación indebida de sueldos, sean quienes fueren los autores de estos

excesos; ni las prestaciones voluntarias que se hicieron a la reacción; ni la responsabilidad pecuniaria en que hubiesen incurrido por sus delitos políticos las personas comprendidas en el artículo 2º de esta ley, aun cuando no sean reos de otros delitos; ni abraza, por último, la responsabilidad de dichas personas por disposiciones o contratos que hubieren causado grave lesión a la Hacienda Federal. Todas las reparaciones y penas consiguientes a estos delitos, se harán efectivas con arreglo a las leyes.

Artículo 4º- Los militares que hubiesen servido a los gobiernos intrusos y que no pertenezcan a ninguna de las categorías expresadas en el artículo 2º si, además de eso, no hubiesen cometido ninguno de los delitos exceptuados en esta amnistía, no sufrirán otra pena que establecida en el decreto de...⁵ expedido por el general en jefe del ejército federal.

Artículo 5º- Esta amnistía no deroga la circular de. . .⁶

Artículo 6º- Las autoridades civiles y militares así como los empleados que habiendo tomado parte en el golpe de Estado de 17 de diciembre de 1857, reconocieron el orden constitucional antes del 11 de enero de 1858 y han confirmado sosteniéndolo hasta la fecha, disfrutarán de la gracia que concede esta ley.

Artículo 7º- Se comprenderán en la presente amnistía los individuos que aún permanecen con las armas en la mano contra el orden constitucional, siempre que se sometan a la obediencia del gobierno en el perentorio término de tres días, contados desde él, en que se les haga saber esta ley por la autoridad política respectiva o por el jefe de las fuerzas destinadas a su persecución.

⁵ En blanco en el manuscrito.

⁶ En blanco en el manuscrito.

Artículo 8º- Se confirman los indultos, penas, conmutaciones de penas y providencias gubernativas que haya dado el gobierno general antes de la publicación de la presente ley.⁷

Este proyecto se discutió y aprobó en junta de ministros.

Señores Ocampo, Fuente, Llave, Emparan y González Ortega en los días 13, 14 y 15 de enero de 1861 y no se publicó porque se cambió el gabinete y porque en clubes jurídicos de la capital se opusieron a toda medida de amnistía.

⁷ Hasta aquí no es letra de Juárez. Lo que sigue hasta el final, manuscrito de Juárez.

RENUNCIA EL GABINETE PARA FACILITAR LA REORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO

La irregularidad de la situación hará que vuestra excelencia [V. E.] nos permita dirigirle directamente la renuncia que hacemos de las carteras que V. E. se había dignado conferirnos.

Omitimos explicar las circunstancias que nos han hecho creer necesario y conveniente para la causa pública formar tal renuncia; pero sí pedimos a V. E. nos permita recordarle que, desde la mañana en que V. E. amaneció en Guadalupe, propuso el ministro de Relaciones a los señores sus compañeros de gabinete, que adoptaran la idea y a V. E. mismo que nos retiráramos. En la noche de ese mismo día volvimos a tratar más seriamente de esta misma idea, exceptuado el señor (González) Ortega que entró después y V. E. rehusó, con muy buenas razones, que la pusiéramos en práctica.

Antes de hoy se ha repetido la misma discusión y hemos cedido, convencidos de la exactitud de los razonamientos de V. E. Pero las circunstancias han cambiado en términos, de que, sin desconocer esas buenas razones, un patriotismo que creemos bien entendido nos ha impulsado a todos a persistir en renunciar.

El señor Fuente tuvo ocasión de separarse antes.

Rogamos, pues, a V. E. que admita la renuncia que hacemos de las carteras de Relaciones, de Gobernación, de Guerra, de Hacienda y de Fomento, para que así quede más libre en el desempeño de su gobierno y

que acepte, al mismo tiempo nuestras más rendidas gracias por la benevolencia con que siempre se ha dignado distinguirnos.

Dios y Libertad. México, enero 17 de 1861.

Melchor Ocampo
Jesús González Ortega

Ignacio Llave
José de Emparan

EL DEBER DEL GOBIERNO FEDERAL
CONSISTE EN REVESTIR DE FUERZA Y PRESTIGIO
A NUESTROS HOMBRES

México, enero 19 de 1861

Excelentísimo señor don Plácido Vega
Mazatlán

Muy estimado amigo y señor mío:

Por las comunicaciones oficiales y aun antes acaso por los papeles públicos, será usted impuesto de que el gabinete a que tuve la honra de pertenecer ha presentado su dimisión. Este suceso, sencillo y frecuente en los gobiernos representativos y más todavía y en cierta manera forzoso al inaugurarse una nueva era administrativa, después de haber salido de la que atravesamos, de acción especialmente militar, puede prestar y prestará mérito a muchos para que hagan de él gratuitos comentarios en pro de la vencida causa del retroceso y daño de la unión y de la confianza de los liberales; cumple por tanto a mi deber de hombre público y es una obligación de mi conciencia política, impedir que la astucia y la mala fe logren lo que no pueden lograr ya las armas aniquiladas en los campos de batalla, una vez para siempre. No, señor mío, la dimisión del gabinete, la separación mía del puesto que me dio a su lado la bondad del señor presidente, no importan en lo más mínimo divergencia de ideas en lo sustancial del programa liberal de reformas y de adelantamientos; no importan siquiera disgustos privados entre las personas dimitentes o de ellas para con el jefe del Estado, ni, mil veces menos, por último, vacilaciones de éste en la marcha que la Constitución y leyes le señalan y que él se propone seguir. Tiene la convicción y la ciencia de las doctrinas

de progreso; alienta la fe que nace de ellas para un grandioso porvenir y, con ánimo firme y corazón resuelto, sabrá llevar adelante los principios y castigar con todo rigor a todos los cómplices de la reacción y a sus agentes hasta sus últimos ápices, para destruir sus postreras esperanzas, hacerla imposible y restablecer el imperio de la ley y de la justicia. Los liberales, pues, los amantes de las reformas, deben estar bien seguros y librar con toda confianza a su fe y su expectativa, en el digno magistrado que bajo tantos títulos la tiene desde antes merecida. Con toda la energía y la franqueza de mi carácter hago a usted esta declaración.

Los incidentes que han venido a motivar la separación del gabinete, son, en verdad, harto pequeños al respecto de las altas cosas hechas y en vía de hacerse; al ministerio y a mí, el primero, toca asumir la responsabilidad de ellos, con participio o sin él, individualmente en su ausencia. Acepto mi parte y aun tomaría la de los demás si preciso fuera, porque en parangón con las grandes cosas deben despreciarse las miserias políticas y, si para salvar importantes principios o para llegar a magníficos fines, es forzoso atravesar por períodos de prueba y correr graves peligros, los liberales debemos hacer, todos y cada uno, ambas cosas sin vacilar.

Tengamos fe en nuestros hombres, revistámoslos de fuerza y de prestigio, tal es nuestro deber.

Me es sumamente grato estar persuadido de que usted abunda sobre este particular en mis ideas y de que, consecuente con ellas, seguirá obrando como hasta aquí, unísono en el programa liberal, cuyo espléndido triunfo hemos conquistado. Por mi parte, al despedirme de usted, en mi carácter de ministro, le ofrezco cordialmente mi pobre cooperación, si la juzgare útil, para todo lo que conduzca a la consolidación de nuestra conquista y a la franca amistad con que sigo repitiéndome su afectísimo y s. s. q. b. s. m.

Melchor Ocampo

CIRCULAR DE FRANCISCO ZARCO,
MINISTRO DE RELACIONES,
AL RESTABLECERSE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

Excelentísimo señor gobernador del estado de. . .

Excelentísimo señor:

Llamados por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República a formar su gabinete, el excelentísimo señor licenciado don Ignacio Ramírez en el departamento de Justicia e Instrucción Pública, el excelentísimo señor don Guillermo Prieto en el de Hacienda y Crédito Público, el excelentísimo señor general don Jesús González Ortega en el de Guerra y Marina, y el que suscribe en el de Relaciones Exteriores, hemos tomado hoy posesión de las carteras respectivas, siéndonos en extremo penoso que la premura de las circunstancias y la necesidad de no paralizar la administración pública en el momento en que se ha consumado el triunfo del orden legal, no nos hayan permitido aguardar la llegada o al menos las respuestas de los excelentísimos señores don Pedro Ogazón, gobernador del estado de Jalisco y don Miguel Auza, del de Zacatecas, llamados por el excelentísimo señor presidente a las secretarías de Gobernación y de Fomento. La misma urgencia de las circunstancias ha hecho que S. E. encargue interinamente el despacho de Fomento al excelentísimo señor Ramírez y el de Gobernación al que suscribe. Contando, sin embargo, con la conformidad de ideas de los excelentísimos señores Ogazón y Auza, a quienes tanto debe la causa del orden legal y que conocen tan profundamente la situación y las necesidades de algunos de los principales estados de la Unión, hemos creído que no debíamos retardar la formación del ministerio y el

despacho de los negocios y hoy mismo hemos entrado al ejercicio de nuestras funciones.

Considerando que el ciudadano se debe todo a su país, que en las presentes circunstancias sería casi un crimen negar la más eficaz cooperación a la obra de reorganización social que del presidente espera la República y que para ello no habría excusa suficiente en razones de interés particular, ni aun en la desconfianza de nuestras propias fuerzas, hemos venido en torno del primer magistrado de la República, decididos a secundar sus patrióticas miras, a ayudarle hasta donde podamos en la consolidación de la paz y de la Reforma y en la restauración completa y leal del sistema constitucional. Hemos venido resueltos a todo género de sacrificios, al de nuestra tranquilidad, al de nuestras afecciones y aun al de nuestra reputación; pero hemos venido también con todas nuestras opiniones, con todas nuestras convicciones y con el deseo íntimo, sincero, de servir a la causa del pueblo, según los principios que defendimos siempre en toda nuestra carrera política. Llenos de adhesión y de respeto al presidente de la República, reconocidos como mexicanos a su heroica constancia y a su patriótica abnegación por salvar las libertades públicas, somos también ministros responsables ante la ley y ante la opinión de nuestros conciudadanos y esta consideración nos ha hecho no ascender al poder sino después de ponernos de acuerdo en un plan completo de gobierno, de proponerlo al jefe del ejecutivo y de tener el gusto de verlo aceptado por S. E.

No es extraña, en verdad, esta conformidad entre hombres que han defendido la misma causa y que derivan todas sus creencias políticas del principio para ellos incontrovertible de la soberanía del pueblo. Bastó una conferencia de pocas horas para convenir en la marcha que debe seguir la administración y nos fue grato encontrar en S. E., el presidente, las mismas ideas y las propias aspiraciones que unánimemente expresa la opinión pública.

S. E. ha acordado instruir a la nación de la política que se propone seguir y con este fin se ha servido prevenirme dirija a V. E. la presente nota.

La primera cuestión que se presenta al gobierno, es la de decidir si limita y estrecha sus facultades en todos los ramos de la administración a las prescripciones constitucionales, o si, en virtud de las circunstancias, debe obrar discrecionalmente en algunos casos y suplir con su acción la falta del Poder Legislativo.

Esta cuestión que parece afectar la esencia misma de nuestras instituciones y la consecuencia de los hombres que proclaman principios liberales, está ya resuelta por la opinión, por la ley de la necesidad y por el espíritu de la revolución progresista. "Constitución y Reforma" ha sido el lema de las banderas del pueblo en la sangrienta lucha que heroica y magnánima ha sostenido contra sus opresores; "Constitución y Reforma" ha sido el grito de guerra que durante tres años ha resonado sin cesar en todo el territorio de la República; "Constitución y Reforma" ha sido la aspiración de los hombres pensadores y de las clases desvalidas que tienen el instinto de su bienestar; "Constitución y Reforma" ha sido la esperanza de los oprimidos en las cárceles y el voto postrero de los mártires que han sucumbido en el patíbulo; "Constitución y Reforma" es, por último, la esperanza que de nuestra existencia y de nuestra nacionalidad tiene el mundo civilizado; "Constitución y Reforma" debe ser, pues, el programa del Gobierno que quiera marchar con la opinión pública y satisfacer las exigencias de la época.

Si el presidente constitucional ha conservado, en medio de los mayores desastres, todo el prestigio y toda la fuerza moral de su autoridad, ha sido porque simbolizaba el sistema de gobierno que la Carta de 1857 establece, el gobierno del pueblo por el pueblo y porque se sabía que cuando lograra sobreponerse a la facción opresora había de devolvernos la libertad política y la libertad civil, los derechos del hombre y los del ciudadano. Si durante la lucha el pueblo mexicano no se ha detenido ante los más costosos sacrificios, ha sido porque tenía la certidumbre de que al restaurarse la paz había de volver al régimen legal y al sistema representativo. Si el mismo gobierno, para sostener la guerra y vencer a la facción liberticida ha recurrido a medidas discrecionales, lo ha hecho en fuerza de las circunstancias y sólo con el fin de salvar las instituciones. Pero una vez vencido el bando retrógrado, no sólo por las

armas, sino también por la reprobación nacional, cesa la triste necesidad de obrar discrecionalmente y el gobierno está en el deber de no omitir esfuerzo para que el país vuelva al régimen constitucional. No es esto incompatible con la consumación de la Reforma.

Si bien serán respetadas las garantías individuales, cesando el estado de sitio y todo lo excepcional que como una de sus calamidades produjo la guerra civil, el Ejecutivo, sin ejercer la dictadura, sin apartarse del sendero que la opinión pública le traza, no paralizará su acción y en los casos en que lo reclame la necesidad no se cruzará de brazos ante las dificultades por respetar formalidades legales. Tal conducta no probaría adhesión a las instituciones, sino indiferencia hacia los males públicos y una timidez tan indigna como culpable.

El Ejecutivo se esforzará en abreviar el período de transición que vamos atravesando y, entretanto, sus esfuerzos se dirigirán a procurar con asiduo empeño a allanar los obstáculos, que encontrar pudieran los ciudadanos que el pueblo elija para la Suprema Magistratura y para que lo representen en el Congreso de la Unión.

Expedida ya la convocatoria y autorizados los gobiernos de los estados para señalar los días en que han de verificarse los actos electorales, el gobierno protesta respetar la libertad del sufragio, no emplear su influencia en esos actos en que se ejerce la soberanía popular y está íntimamente convencido de que sólo una elección libre y la representación de todas las opiniones políticas puede producir una reconciliación sincera entre los mexicanos y afirmar la paz, que es la primera de nuestras necesidades.

Ya que la legalidad ha triunfado sin transacciones que la falsearan, sin intervención extranjera que humillara no a este o aquel partido, sino a la nación toda, la Constitución puede ser reformada libremente por los medios que ella misma establece. El gobierno no pondrá mano en estas cuestiones, que quedarán intactas a la resolución que les den el buen sentido y la experiencia de los representantes del pueblo.

El gobierno asegurará a los mexicanos el ejercicio de todos los derechos que la Constitución les concede. La libertad de enseñanza, la de industria, la de la prensa; el derecho de reunión, el de petición, el de

tránsito y las garantías que el acusado tiene ante los tribunales; todo esto será escrupulosamente respetado por el Ejecutivo.

La necesidad de reorganizar la administración pública y de sacar al país del caos en que lo ha hundido la anarquía reclama medidas prontas, severas, enérgicas, pero que en nada afectan la cuestión política. El gobierno las dictará en el orden económico y administrativo para evitar la disolución social y, con este fin, ejercerá algunas de las facultades reservadas al Congreso o ejercerá sólo las que, según la Constitución, necesitan del concurso de aquella asamblea.

Las reformas sociales decretadas en Veracruz y que se reasumen en la nacionalización de los bienes de manos muertas, la libertad de cultos, la consiguiente independencia entre la potestad civil y la espiritual, están sancionadas por la opinión, han sido el principal objeto de la contienda y, en vez de estar en pugna con la Constitución, son el desarrollo del germen que ella contenía. El gobierno ni puede ni debe retroceder en la vía de las innovaciones, tan conformes con el espíritu del siglo y que son el único medio de reanimar y fortalecer una sociedad casi aniquilada por inveterados abusos y oscuras preocupaciones, destrozada por medio siglo de discordias. La emancipación del poder civil, la libertad de conciencia, el respeto a todas las creencias, asegurarán la paz y traerán a la República nuevos elementos de riqueza y de prosperidad.

Las Leyes de Reforma no son, como ha dicho el espíritu de partido, una hostilidad contra la religión que profesa la mayoría de los mexicanos; lejos de eso, otorgan a la iglesia la más amplia libertad, la dejan independiente para que obre en los espíritus y en la conciencia, la apartan del bastardo influjo de la política y hacen cesar aquel fatal consorcio de las dos potestades, que producía el escándalo, unas veces, de que los gobiernos abusaran del nombre de la religión oprimiéndola y, otras, de que el clero se convirtiera en un instrumento de dominación. El gobierno está resuelto a llevar a cabo las reformas decretadas, a plantearlas en la República entera y a hacer que se hagan sentir sus beneficios derramándose y descendiendo desde la cumbre de la sociedad hasta las clases más desvalidas.

Procurará combinar todos los intereses creados, aclarará todas las dudas para facilitar la adquisición de la propiedad y lograr no sólo la destrucción del poder que ha mantenido al país en perpetuas agitaciones, sino el desarrollo del crédito, la extinción o disminución de la deuda, la creación del erario, la capitalización de empleos civiles y militares, la reducción del presupuesto y las grandes mejoras materiales.

El gobierno, pues, seguirá como programa el lema de la bandera que, victoriosa, ha recorrido la República entera: "Constitución y Reforma". No ejercerá la dictadura, se sujetará al orden legal; pero reorganizará la administración y, en los casos necesarios, dictará medidas legislativas aceptando la responsabilidad que le resulte de no vivir inerte y de no contemplar impasible los males del país.

Las relaciones exteriores de la República llamarán preferentemente su atención. El gobierno legítimo que no ha dejado de existir un solo día, que deriva su legitimidad de las instituciones del país y de la voluntad del pueblo, no puede reconocer que fue gobierno la facción de Tacubaya, tan sólo porque con ella plugo tratar a los representantes de algunas potencias extranjeras. De este error de la diplomacia, de la connivencia que ésta tuvo con la facción, no puede ser responsable la República. El gobierno hará valer sus derechos con moderación y dignidad, no provocará conflictos, protesta ante el mundo su deseo sincero de mantener amistosas relaciones con todos los pueblos y de cumplir todos los compromisos internacionales que le imponen los tratados y el derecho de gentes. Cree que los gobiernos de algunas naciones amigas han sido mal informados acerca de la situación de México, procurará hacerles conocer toda la verdad y, guiado por un espíritu de conciliación y de justicia, intentará el arreglo satisfactorio de todas las cuestiones pendientes por todos los medios posibles y que están en práctica en el mundo civilizado, para mantener la armonía y la concordia entre pueblos amigos.

Serán oídas todas las quejas, atendidas todas las reclamaciones fundadas en derecho y se acreditarán misiones en el extranjero; se recurrirá a los medios de arbitraje o mediación estando seguro el país de que, por grande que sea este espíritu de conciliación, nunca llevará al

gobierno al sacrificio de nuestro decoro como potencia soberana e independiente. Mientras se procuren estos arreglos por la vía diplomática, el gobierno asegura a los extranjeros no sólo las garantías que la Constitución otorga a los habitantes del país y los derechos que les aseguran los tratados, sino una fraternal hospitalidad, todo género de protección, seguridad en sus personas y propiedades y el libre ejercicio de sus cultos. El gobierno se propone no hacer uso del derecho que tiene de expulsar al extranjero pernicioso, sino en casos de notoria evidencia y de conveniencia pública, pues en lo general no quiere que ante la ley haya diferencias entre nacionales y extranjeros.

Entre las necesidades públicas ocupa un lugar preferente la de restablecer el imperio de la ley, ejercer estricta justicia y no consentir la impunidad de grandes atentados.

Bien quisiera el excelentísimo señor presidente poder considerar a los usurpadores vencidos hoy por la legalidad, simples adversarios políticos en quienes hubiera que respetar opiniones sinceras y convicciones profundas. Así podría concederles no sólo tolerancia y olvido, sino las mismas libertades y derechos que ellos quisieron arrebatar a la nación entera. Pero en esos hombres, que caminaron sin plan, que ensangrentaron al país, que ultrajaron las leyes, que en su demencia de tiranía se mancharon con hechos atroces y bárbaros, no puede verse un partido político vencido. Formaron una gavilla numerosa, llena de títulos; se llamaron funcionarios públicos, se arrogaron el poder, pero no pensaron más que en saciar viles rencores y ambiciones personales.

A medida que se van examinando los ramos de la administración para reorganizarlos, se descubren en todas partes nuevas iniquidades, nuevos atentados y, preciso es llamar las cosas por su nombre, nuevos robos de todas clases. Desde el asalto con fractura a la luz del día y atropellando el domicilio y los sellos de un representante extranjero, hasta el hurto furtivo, ratero y miserable. Cuando la sociedad anhela el restablecimiento de la moral, cuando el mundo execra a los asesinos de Tacubaya, cuando las potencias extranjeras reclaman el castigo de actos de vandalismo cometidos en nombre de la religión, el gobierno que, por

seguir impulsos de clemencia, concediera impunidad a tan grandes criminales se mancharía con una especie de complicidad y frustraría todas las esperanzas de la nación. Justicia, justicia es el clamor de esta sociedad y justicia habrá que calme su ansiedad. Ni S. E. el presidente, ni sus ministros abrigan odio ni rencores. No se mancharán con represalias ni venganzas; pero tienen el deber imprescindible de hacer observar las leyes y de que ellas imperen con toda su majestad, con toda su severidad.

El gobierno, en esta obra de reparación dejará libres y expeditos a los tribunales, sin coartar en nada su independencia. Los reos serán juzgados, pero con todas las garantías que otorga la Constitución y sin sufrir los ultrajes y vejaciones que ellos se complacieron en imponer a los que tenían el delito de pensar, de sentir, de deplorar los males de la patria. Los jueces competentes conocerán de todas las causas de responsabilidad, como conocen día a día de los crímenes del orden común y las sentencias que pronuncien serán ejecutadas.

Sobre los perjuicios y daños originados unas veces por la policía, otras por la fuerza armada, otras por los llamados gobernantes, queda expedita la acción popular y los tribunales abiertos para conceder reparaciones. El gobierno se ocupará preferentemente de reorganizar todo el Poder Judicial conforme a las leyes; debe hacer saber al país que ha desechado el proyecto de crear un jurado político y arbitrario para los delitos de la reacción, porque, en su respeto a la ley, a nadie ha querido privar de garantías, no ha querido instituir tribunales revolucionarios, ni dar retroactividad a sus disposiciones.

En lo general, el gobierno, si no puede llevar a cabo, dejará iniciadas grandes reformas en la administración de justicia, que todas tenderán a simplificarla, a hacerla expedita y regular.

El juicio por jurados, que en un país libre es el complemento de los derechos políticos, se planteará como un ensayo en los lugares directamente administrados por el gobierno general. Será efectiva la abolición de las costas judiciales, dotando a los encargados de administrar justicia hasta donde lo permita la situación del erario.

Será efectiva la libertad de enseñanza, dejándola a la familia, al municipio, al Estado, a la asociación religiosa. El gobierno, por su parte,

procurará generalizar la instrucción primaria, perfeccionar la facultativa en todas las profesiones y merecerán todo su cuidado las escuelas de Medicina, de Agricultura, de Artes y Oficios, de Minería y de Comercio, y las Academias de Bellas Artes; establecimientos que encuentra unos casi en ruina y otros totalmente destruidos por el gobierno de vivac, que sentía que su perdición estaba en el desarrollo de las inteligencias y en la difusión de las luces.

Secularizados los establecimientos de utilidad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, dándole la importancia que merece por la influencia que ejerce en la sociedad.

Es deber del Ejecutivo estrechar el vínculo federal y ayudar a los estados a plantear su régimen interior con la libertad e independencia que ellos convivieron en el pacto de su unión. Respetando su soberanía en su régimen interior y, creyendo que los que más han luchado lo han hecho por reconquistar las libertades públicas, hará que en la República entera se disfruten desde luego las ventajas todas del orden legal.

Como responsable de la observancia de la Constitución, reasumirá las facultades que sólo a él le corresponden en un orden regular y que él mismo delegó en virtud de las circunstancias. Procurará el restablecimiento de la paz en todas partes. Se complace en ver en algunos estados restaurada la observancia de sus constituciones particulares. Igual ventaja debe procurarse en los pocos en que aún subsisten poderes discrecionales y dónde no llegó a terminarse la Constitución deben ser convocadas las legislaturas constituyentes, o adoptarse las medidas que reclame la necesidad. Donde quiera que se perturbe el orden público se hará sentir la acción del gobierno de la Unión y en las cuestiones interiores de los estados auxiliará a los poderes legítimos en el caso prevenido en el artículo 116 de la Constitución. El gobierno cuenta con que los estados tengan tanta prudencia en la paz, como energía desplegaron durante la guerra. Sin aquélla ésta sería estéril.

Hay prevenciones constitucionales que casi no pueden tener cumplimiento por falta de las leyes orgánicas y secundarias que debieron reglamentarlas. Esta falta suele originar dudas, desconfianzas y alarmas y abrir ancha puerta a la arbitrariedad, haciendo ilusorios los más preciosos

derechos. Las circunstancias indicarán las materias en que el Ejecutivo tenga que llenar este vacío para asegurar más y más las garantías individuales.

El caso que demanda desde luego alguna resolución, es el de la libertad de imprenta. La Constitución la declara inviolable, no le impone más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, pero le ofrece la garantía de un jurado de calificación y otro de sentencia y no hay ninguna ley que organice estos jurados y defina el delito y establezca la pena. El gobierno que no ha dictado ninguna medida represiva, que quiere marchar con la opinión, que ve en la prensa uno de los medios más a propósito para conocerla, que no teme la censura de sus actos pues, si es fundada, está dispuesto a aprovecharla, ni teme tampoco la calumnia cuando entran en su sistema la publicidad y la franca discusión, se ocupará de desarrollar el artículo constitucional en un reglamento provisorio que dé las más cumplidas garantías a sus antagonistas en el terreno de los debates políticos. Cree que los abusos de la prensa y sus consecuencias se exageran por los enemigos de la discusión y por los que pretenden ser infalibles. Cree que sus abusos tienen su correctivo en la misma imprenta y está persuadido de que con la libertad, el periodismo puede llegar a ser un elemento de civilización y de progreso y que en su libertad no sólo se interesan los derechos políticos, sino el comercio y la industria, el trabajo y el capital, la ciencia y la literatura.

En todo lo que afecta a la organización interior de la República y a lo meramente administrativo, el gobierno procurará combinar el orden con la libertad, de lo que resulta el verdadero progreso. La suerte del Distrito Federal, que tanto sufrió del dominio brutal de los usurpadores, no le será indiferente. Exento de preocupaciones, mira en esta hermosa capital un foco de verdadera civilización, considera que sin ella, no sería completa la victoria de la legalidad y mira en las muestras de simpatía que sus habitantes han prodigado al ejército libertador y al depositario del Ejecutivo, una prueba del apoyo que aquí tienen los principios democráticos y las ideas de reforma. No es justo que en esta parte de la República, los ciudadanos estén privados de los derechos que ejercen en

todas las demás; no es conveniente ni político que la presencia del gobierno de la Unión sea incompatible con la prosperidad del punto en que resida.

Desde luego el gobierno dejará a los ciudadanos en amplia libertad para elegir sus ayuntamientos que hace años no han sido más que comisiones gubernativas. Los elegidos del pueblo promoverán, sin duda, grandes mejoras y el gobierno les ofrece desde ahora toda su cooperación para llevarlas a cabo. Le es sensible no poder desde luego dar al distrito una nueva organización política conforme a sus necesidades, pero, en lo administrativo, no omitirá esfuerzos por mejorar su condición. Tiene acordado mantener, secularizar y perfeccionar todos los establecimientos de enseñanza, de beneficencia y de caridad que aquí existen y si no puede terminar, preparará, a lo menos, para cuando se reúna el Congreso, todo lo relativo a una organización política que está de acuerdo con los principios constitucionales y, sobre todo, con el que establece que toda autoridad se deriva del pueblo.

En el ramo de Fomento, sean cuales fueren las dificultades de la situación política, se impulsarán todas las mejoras materiales indispensables para el desarrollo de nuestros elementos de prosperidad y de riqueza.

El comercio, la industria, la agricultura y la minería encontrarán la mejor protección, la que consiste en dejarles libertad de crecer, de desarrollarse, de unirse, de apoyarse mutuamente sin que añejos errores económicos produzcan rivalidades absurdas entre elementos que pueden concurrir a un tiempo a la creación del erario y al bien de los particulares. El gobierno se propone proteger todas las empresas útiles, estimular el espíritu de asociación, realizar las mejoras aunque sea lentamente y considera como un obstáculo para la industria y para abrir vías de comunicaciones, la profusión de privilegios otorgados con imprevisión y que sólo han sido valores imaginarios que, de mano en mano, han ido desmereciendo en el mercado, si no han servido para grandes abusos y enormes despilfarros. Serán pues revisados esos privilegios y recogidos los que sean contrarios al espíritu liberal de la Constitución y los que

hayan caducado y sirvan sólo de obstáculo a la realización de las mejoras.

La medición y deslinde de los terrenos baldíos es un trabajo necesario que puede ser productivo para el erario; aumentar el número de los propietarios y emancipar a la clase indígena de esa especie de servidumbre doméstica y feudal que sobre ella pesa desde que los conquistadores hicieron los repartimientos de indios, como si se tratara de cabezas de ganado.

Es ya tiempo de realizar los proyectos de colonización, que se han estrellado siempre ante el obstáculo de la intolerancia religiosa, de la arbitrariedad sistemática y de la falta de respeto a las garantías individuales. El gobierno no quiere sólo el aumento numérico de la población sino el de la producción y el consumo, la mejora de la agricultura, el cultivo de muchas de nuestras plantas indígenas estimadas en todos los mercados y la aclimatación de las exóticas, que en nuestros variados climas encontrarán siempre terrenos a propósito. En todas las empresas útiles, el gobierno no se dejará guiar por el mezquino espíritu de especulación mercantil, no descenderá hasta ponerse detrás del mostrador y está persuadido de que la libertad y el sistema de "dejar hacer" son los mejores medios de facilitar las grandes mejoras materiales.

En el ramo de Hacienda casi todo está por hacer. El orden, la economía, la regularidad que se han establecido bajo los regímenes constitucionales han desaparecido siempre al erigirse las dictaduras. Los despilfarros originan el caos y la bancarrota.

Ninguna fue tan ruínosa como la que se derivó del Plan de Tacubaya. En todo dejó la confusión y el desorden más espantoso y envolvió en la ruina del erario la de los bienes de manos muertas. Imposible es reparar los daños causados por tanta ignorancia, por tanta imprevisión, por tantas concusiones. Sólo se puede poner coto a las consecuencias de ese desorden, no aceptando para el país los compromisos que para esclavizarlo quisieron echarle encima sus verdugos.

La nulidad de los contratos hechos con los facciosos fue declarada oportunamente por el gobierno legal que la sostendrá y que nunca podrá

consentir en que el país reconozca como deuda el precio de su servidumbre y de su sangre. Es menester armonizar las Leyes de Reforma y sus circulares aclaratorias en el punto de desamortización de los bienes de manos muertas, para conciliar el respeto a los intereses legítimos, procurar recursos al erario y evitar todo género de abusos. La obra de la Reforma, además de su importancia social, para ser útil y benéfica, necesita ser una obra de estricta justicia y de alta moralidad.

Sin un presupuesto fijo, invariable, es imposible la administración de la Hacienda. La bancarrota y el descrédito fueron siempre el fruto de la prodigalidad. Las rentas públicas en que se aglomeran lo superfluo de la opulencia y el óbolo de la miseria, no son el patrimonio de los gobiernos, ni están destinadas a ganarse amigos y prosélitos: son el bien de la comunidad y no pueden distraerse de lo que a ésta sea benéfico y necesario.

El presupuesto se reducirá a lo más indispensable y el excelentísimo señor presidente ha acordado ya que por cada ministerio se le propongan las mayores economías posibles en los presupuestos de los ramos todos de la administración.

Está en las teorías de la época y, lo que es más, en la experiencia de una práctica constante que nada más es ruinoso que el sistema prohibitivo y las restricciones impuestas al tráfico exterior. El gobierno se propone por lo mismo seguir en esto, como en todo, un sistema de libertad; modificar el arancel de aduanas marítimas y librar al comercio de las onerosas ritualidades fiscales que sólo sirven para estimular el contrabando.

Si el comercio exterior merece la protección que da la libertad, no es menos digno de ella el tráfico interior. La Constitución prometió la abolición de las alcabalas para una época fija, creyendo que la paz estaba ya consolidada. El tiempo que debía haber pasado en afirmar el edificio constitucional, pasó en el estruendo de la guerra civil; al restaurarse la paz, lo que era sencillo y hacedero en 1857, es casi imposible en 1861 y, sin embargo, el gobierno, al confesar que no puede extinguir en todas sus partes el sistema de alcabalas sin exponerse a la más absoluta penuria de recursos y a poner en peligro la tranquilidad pública, hace a la nación la

promesa solemne de comenzar desde luego a disminuir y a abolir los impuestos interiores que pesan sobre los efectos de primera necesidad y sobre la clase más menesterosa y avanzará en esta senda de libertad y de franquicia a medida que vaya reorganizando la Hacienda pública a fuerza de economías, de orden en la administración, de suprimir oficinas y gastos inútiles y de dar valor a los títulos de la deuda, haciendo la liquidación de la flotante y admitiéndola en los negocios de desamortización.

Ha querido sostenerse que el gobierno constitucional es el enemigo sistemático de la institución del ejército permanente, dando este nombre a las hordas un tanto disciplinadas, que a las órdenes de forajidos famosos, han destruido las libertades públicas y llevado a todas partes la desolación y el exterminio. El gobierno reconoce la necesidad de que haya ejército permanentemente, pero proclama que la fuerza armada es para el país y no el país para la fuerza armada. De aquí deduce que el ejército, en cuanto a número, debe limitarse a las necesidades y a los recursos de la República y, por lo demás, para darle moralidad y disciplina y hacerlo el defensor de la independencia y el apoyo de las libertades públicas, es menester no reclutarlo por medio de la leva, no admitir en él gentes perdidas, no recompensar con despachos el espionaje, la delación y otros servicios más infames todavía, no prodigar ascensos a los héroes de antesala y, sobre todo, dar educación, tanto en lo facultativo como en lo civil, a los que han de ser jefes y oficiales. Con este fin se restablecerá el colegio militar y sólo los jóvenes que hayan hecho sus estudios con aprovechamiento, podrán seguir como oficiales la carrera de las armas. La disposición general que dio de baja a la parte del ejército que sirvió a la reacción, se funda en principios de justicia y era reclamada por la moral pública. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a hacer las excepciones que aconseja la equidad y, al efecto, organizará una comisión que revise cada caso particular.

Tales son, señor gobernador, los puntos principales del programa, conforme al que el nuevo ministerio ha convenido en encargarse de los negocios públicos y que ha merecido la aprobación del excelentísimo

señor presidente, a cuya honrosa confianza procurará corresponder el gabinete sirviendo al país con valor, con lealtad y con desinterés.

S. E. el presidente, me previene comunique a V. E. que, discutida y examinada detenidamente por el nuevo ministerio, la medida de expulsión del señor arzobispo de México y de algunos señores obispos que tuvieron parte en la subversión de las instituciones y en la prolongación de la guerra civil, la orden de destierro fue plenamente aprobada y se acordó subsistiera.

S. E. el presidente, se digna permitirme añadir que mi voto fue el único que esa medida tuvo en contra en el consejo de ministros, reclamando que los desterrados fuesen sometidos a juicio ante el tribunal competente, que examinara su culpabilidad y fallara conforme a las leyes.

La medida fue defendida con razones no sólo de conveniencia política sino de legalidad, pues la ley vigente autoriza al Ejecutivo para someter a juicio o expulsar del territorio nacional a los individuos que se hallen en el caso de los señores obispos. Esta circunstancia fue la que movió al excelentísimo señor ministro de la Guerra a votar la medida que había reprobado cuando se discutió en el ministerio anterior.

Yo persistí en mi opinión y aún creí que esta diferencia de parecer debía excluirme del gabinete. Pero como en este solo punto hubo diferencia, como la cuestión estaba resuelta de antemano y no puede pesar sobre mi responsabilidad, el excelentísimo señor presidente no consintió en mi separación y, en obsequio de mi reputación de hombre consecuente, tuvo la bondad de autorizarme a dar la presente explicación.

Al cumplir la orden de S. E. de comunicar al gobierno de ese Estado el programa de la administración, tengo la honra de ofrecer a V. E. las seguridades de mi consideración muy distinguida.

Dios, Libertad y Reforma, enero 20 de 1861.

(Francisco) Zarco